

JÚBILO DE GOBIERNOS E IP POR APROBACIÓN DEL TLCCA; LUTO DE LOS TRABAJADORES

Los defensores de las actividades agrícolas temen que con el pacto se registre pérdida de empleos

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

Gobiernos centroamericanos y líderes empresariales aclamaron la aprobación por el Congreso estadounidense de un tratado de libre comercio regional, al cual consideraron una bendición para sus consumidores y para sus esfuerzos de modernización. En cambio, sindicatos y algunos grupos de agricultores advierten del peligro de la pérdida de empleos y otros efectos lamentables.

El Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLCCA) no tendrá muchos efectos sobre la economía estadounidense, porque el comercio entre Estados Unidos y los países de la región es relativamente escaso. Pero los entusiastas afirman que podría dar un muy necesario impulso a una de las zonas más pobres del hemisferio, si en realidad produce los beneficios prometidos.

El presidente de El Salvador, Tony Saca, uno de los más fuertes impulsores del proyecto, dijo: "Nos despertamos hoy con la certeza de un tratado de libre comercio que había sido un sueño durante muchos años. Centroamérica ha ganado, y debemos celebrarlo". Su similar de Honduras, Ricardo Maduro, afirmó que el TLCCA producirá "crecimiento económico y empleos dignos y permanentes".

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pacto por margen muy estrecho. El Senado lo había aprobado antes y pronto lo firmará el presidente Bush, cuyo gobierno sostuvo que el TLCCA promoverá el desarrollo económico en Centroamérica, lo cual a su vez impulsará



En varios países de Centroamérica la población no cree que el acuerdo comercial con Estados Unidos les reporte grandes beneficios

la estabilidad política de la región, contendrá el flujo migratorio y sentará las bases para tratados comerciales más ambiciosos que abarquen el hemisferio occidental y el mundo entero.

En un periodo de 18 años, el tratado retirará la mayor parte de las barreras comerciales entre Estados Unidos y El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Los observadores apuntan que los últimos tres países todavía deben aprobarlo, pero ahora es mucho mayor la presión de los sectores empresariales para que "aborden la nave".

Suponiendo que el acuerdo

sea realidad, como espera la mayoría de observadores, los consumidores de Centroamérica serían los verdaderos ganadores. Los precios de alimentos básicos como frijol, maíz y la carne de res podrían bajar, y los mercados monopolizados de los seguros y las telecomunicaciones inalámbricas se abrirían a la competencia. Las tarifas de importación en autopartes y computadoras bajarían, lo cual abatiría costos.

Mediante la concesión de incentivos a extranjeros y a empresarios locales para invertir en fábricas, el TLCCA podría producir más trabajos industriales en una región que necesita

desesperadamente de ellos. Algunos sectores agrícolas de Centroamérica se beneficiarán, en especial los productores de fruta, pues las restricciones estacionales al envío de estos productos a los mercados estadounidenses se irán levantando poco a poco.

"Hay empresas esperando en la línea el disparo de salida, y éste llegó con el TLCCA", dice Henry Fransen, director ejecutivo de Maquiladora Assn, de Honduras. "Tengo en las manos varias cartas de compañías brasileñas, coreanas y estadounidenses que quieren invertir aquí, pero a condición de que se apruebe el tratado."

El tratado comercial no es "una panacea", pero impondrá reformas estructurales que podrían conducir a mayor prosperidad en Centroamérica, afirma Manuel Agosin, consejero económico del BID en la región. Dichas reformas incluyen modernización, transparencia de las aduanas y reglas para la inversión y la apertura de procedimientos de gestión gubernamental.

Víctor Meza, analista político de Tegucigalpa, la capital de Honduras, dice que el tratado podría imponer normas más altas en la economía de Centroamérica. "La causa principal de la pobreza en Honduras y Centroamérica es la baja productividad y calidad", afirma. "El TLCCA es una oportunidad de cambiar las reglas del juego para favorecer el trabajo capacitado, una mejor educación... Los políticos deben darse cuenta de que ésta no es una elección, sino una obligación."

Sin embargo, algunos sindicatos agrícolas advierten que ciertos sectores campesinos de Centroamérica podrían sufrir los embates de las empresas estadounidenses del ramo. Líderes sindicales afirman

que los campesinos locales no pueden competir contra las economías de escala y los métodos agrícolas hipereficientes de EU.

Muchos sindicatos de trabajadores agrícolas señalan la experiencia de algunos campesinos mexicanos tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Muchos perdieron su empleo con la llegada de grano a bajo costo de EU, así como de reses importadas, lo cual condujo a que estos trabajadores emigraran de manera indocumentada al país del norte en busca de empleo.

"Con el TLCCA han empezado la agonía y la muerte de la agricultura en El Salvador", dice Ramón Arístides Mendoza, líder del Sindicato Comunitario Salvadoreño, formado por 37 mil ganaderos y pequeños agricultores que cultivan principalmente algodón, maíz, frijol y caña de azúcar. La competencia con los granjeros estadounidenses, señala Mendoza, "siempre ha sido desigual, y ahora la desigualdad se ha legalizado."

José Pinzón, secretario general de la Central de Trabajadores Guatemaltecos, formada por 70 mil miembros, llama a la aprobación una "victoria pírrica para Bush y los presidentes de Centroamérica. Será un desastre para los campesinos y trabajadores que no pueden contar con los subsidios y préstamos baratos que tienen los estadounidenses", dice Pinzón.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica, expresa que con el tiempo el TLCCA podría conducir en su país a la privatización de la electricidad, de los servicios de las aseguradoras y de las telecomunicaciones. "Eso nos costará más que los empleos", sostiene. "Estas instituciones públicas nos han traído 100% de cobertura de agua potable en los hogares de todo el país, 95% de cobertura telefónica y 97% en electricidad. ¿Cómo se verán afectados estos servicios cuando se pongan en manos de compañías extranjeras?"

FUENTE: EIU

Contribuyentes brasileños se rebelan

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

A principios de este mes, casi 200 policías federales irrumpieron en Daslu, fastuoso centro comercial de alta moda. Enfrente de las cámaras de televisión, embargaron mercancía y arrastraron a los propietarios a la cárcel bajo la sospecha de fraude fiscal. En condiciones normales la suerte de Daslu convocaría poca simpatía: es un monumento a Mamón, donde campea la extravagancia aun en el peor de los tiempos. Pero algunos brasileños expresan en voz alta sus preocupaciones acerca de las prioridades del gobierno.

En muchos países de Latinoamérica, los gobiernos son demasiado pobres para proporcionar los servicios básicos. Los

ingresos fiscales de Brasil representan 37% del PIB, cifra similar a la de EU y dos veces más alta que la de Chile. Aun así se estima que la evasión fiscal representa poco más de 11% del PIB. Los brasileños se refieren a la autoridad fiscal como el león. Su voracidad puede observarse en las selvas del distrito financiero de Sao Paulo, donde una pantalla gigante informa cuánto dinero de los contribuyentes ha alimentado al león este año (165 mil mdd hasta ahora).

Con más de 55 mil artículos y 63 impuestos separados, el código fiscal brasileño es un monstruo. CPMF, ICMS, PIS, Cofins, acrónimos de los diferentes impuestos, transitan como criptogramas por los periódicos. Ejércitos de abogados se consagran a descifrarlos. Hay impuestos sobre impuestos, una cascada fiscal

que puede hundir un negocio o arrojarlo a la clandestinidad. Actualmente, 3 millones de empresas brasileñas están atrasadas en sus pagos al fisco.

Los ciudadanos comienzan a devolver la mordida. En mayo, un "frente brasileño" para la reforma fiscal tomó las calles. Forzó al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a desecher los nuevos impuestos que se planeaban, con el argumento de que podrían poner en riesgo 100 mil empleos del sector de servicios. A principios de este mes el frente se movilizó contra un decreto que modera los impuestos sobre la exportación pero deja sin modificación los plazos de pagos fiscales. Mientras las empresas necesitan, en promedio, 57 días para cobrar sus ventas, los impuestos deben pagarse en 25 días.

Durante la década pasada el Congreso ha parchado las disposiciones fiscales mientras compagina propuestas para una revisión completa. Las perspectivas de reforma no parecen nada prometedoras. El gobierno de Lula ha sufrido descrédito debido a acusaciones de corrupción que involucran al Partido de los Trabajadores (PT).

Los rebeldes fiscales ven un vínculo evidente entre la corrupción en Brasilia y el insaciable apetito de ingresos del Estado. Aunque Lula ha merecido elogios de los inversionistas por cumplir la deuda pública brasileña, los críticos señalan que lo ha logrado no mediante la reducción de otros gastos, sino mediante el cobro de niveles impositivos sin precedente.

FUENTE: EIU

“La respuesta podría ser que la gente incremente las estrategias de presión”

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

A Bolivia se le está haciendo hábito expulsar a los inversionistas extranjeros.

En abril de 2000, violentas protestas en Cochabamba, 241 kilómetros al sureste de La Paz, provocaron la salida de Aguas del Tunari, consorcio administrado por Bechtel, la compañía estadounidense de ingeniería. Los activistas dijeron que las manifestaciones habían sido provocadas por el aumento en los precios del agua: en los seis meses durante los cuales manejó el servicio, la compañía incrementó las tarifas entre 35 y 106 por ciento. La empresa argumentó que los aumentos habían sido revocados mucho antes de las protestas, a las que denunció como orquestadas por intereses políticos y comerciales locales.

Sus argumentos fueron inútiles: el Estado se hizo cargo del servicio, y Aguas del Tunari emplazó a Bolivia a un arbitraje internacional. El caso está todavía pendiente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, donde el trámite jurisdiccional está empantanado.

Durante cinco años el gobierno de Bolivia ha tratado de evitar que otra compañía lo demande. Aguas del Illimani, empresa subsidiaria de Suez, el conglomerado empresarial francés, ha manifestado que podría impugnar en la corte la pérdida de un contrato de 30 años para administración y saneamiento de aguas en La Paz y en El Alto, la empobrecida localidad aledaña a esa capital.

El caso surge en el contexto de una extensa y profunda desconfianza hacia las compañías multinacionales que operan en

PUGNA POR EL AGUA ENTRE ACTIVISTAS, GOBIERNO Y TRASNACIONALES EN BOLIVIA

▷ Protestan por aumento en tarifas del servicio que ofrecen extranjeros



Las protestas continúan en Bolivia, en contra de diversas acciones del gobierno de Carlos Mesa

Bolivia. El mes pasado, Carlos Mesa renunció a la presidencia en medio de violentas protestas que exigían la nacionalización de la industria del gas.

Eduardo Rodríguez, el sucesor de Mesa, instauró una legislación que elevó los impuestos a las inversiones extranjeras en el sector del gas, segundo de la región en tamaño. Y este mes British Gas, Total y Repsol, entre las grandes compañías afectadas, siguieron el ejemplo de Suez y advirtieron al gobierno que se prepararán para ir al arbitraje en caso de que no se logre un acuerdo en los 180 días del periodo de tregua.

“El caso de Aguas de Illimani es una prueba más del sombrío entorno para la inversión extranjera”, dice Carlos Alberto López, antiguo ministro de Hidrocarburos de Bolivia, quien ahora es asesor para la industria del gas.

El caso Suez estalló en enero, cuando organizaciones radicales de El Alto convocaron a un bloqueo indefinido destinado a expulsar a Aguas de Illimani. Su principal queja eran los costos de conexión que cobraba la compañía, de 335 a 445 dólares, los cuales consideraban prohibitivos en un país en el que el PIB per cápita es de aproximadamente 915 dólares. Unos días después, Mesa

decretó que su gobierno podría revocar el contrato que la compañía había ganado en 1997. “Aguas del Illimani no jugó limpio con El Alto”, dijo.

Según las informaciones, Mesa se reunió con los líderes vecinales de El Alto el mes pasado y les aseguró que Aguas del Illimani dejaría de administrar el sistema abastecimiento a finales de julio.

Pero Suez no parece estar empacando maletas. Está discutiendo los términos de su salida con el gobierno y las conversaciones no muestran mucho progreso. “Estas negociaciones son extremadamente difíciles”, dice Alva-

ro Camacho, jefe del organismo regulador del agua de Bolivia. “Es probable que pasen muchos meses para que se resuelvan.”

La compensación es la principal manzana de la discordia. Suez afirma que ha invertido 63 millones de dólares en infraestructura, y el gobierno, según medios de comunicación locales, le ofrece 11 millones.

El gobierno pretende revisar el historial completo de Aguas de Illimani para determinar sus activos. Suez afirma que sólo se requiere revisar los tres últimos años, ya que una auditoría efectuada en 2001 aprobó oficialmente sus primeros cinco años de operación.

Aun si pudiera llegarse a un acuerdo sobre la cifra, lo que no queda claro es cómo Bolivia podría pagarla. Los activistas de El Alto temen que se ofrezca a Aguas del Illimani acciones en la nueva operadora, lo que permitiría a la empresa permanecer en el lugar.

El caso Cochabamba pone en duda los beneficios del arbitraje. Bechtel no ha recibido ninguna compensación, y un vocero de la empresa informó al *Financial Times* que era “imposible predecir” cuándo se resolvería el caso.

Aunque Suez insiste en que solamente ha externado su disposición de recurrir a las cortes, Nigel Blackaby, especialista en arbitraje en el bufete Freshfields de abogados de empresa, dice que tienen buenos argumentos. “Sin una compensación apropiada, esto no puede verse sino como una expropiación”, dice.

Si las pláticas demoran demasiado o si los activistas de El Alto perciben un convenio que permita que Suez permanezca, podría haber nuevas protestas.

“La amenaza de Suez de recurrir al arbitraje es una táctica de negociación”, dice Jim Shultz, del Centro Democrático, organización de tendencia izquierdista en Cochabamba. “La respuesta podría ser que la comunidad incrementara sus estrategias de presión.”

FUENTE: EIU



La producción de gas de Bolivia, vital para mitigar la crisis energética chilena

CHILE CEDE, EN BUSCA DEL GAS BOLIVIANO

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

El gobierno chileno ha dado seis señales de acercamiento con Bolivia, pero no quiere saber nada de sus reclamos marítimos. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ignacio Walker, dejó en claro que el tema marítimo no estaría en la agenda que las dos naciones discuten.

Chile ha prometido desactivar las minas de la frontera, tarea que podría llevar 30 años; ha decidido no retener los Juegos Odesur para no afectar sus relaciones con Bolivia; ha propuesto volver al merca-

do abierto con ese país; ha eliminado la revisión de pasaportes a los ciudadanos bolivianos que necesitan entrar a su territorio; esta semana ha apoyado un encuentro entre los cancilleres de ambas naciones en Lima, y ha aceptado reanudar un diálogo sin limitaciones. Sin embargo, el canciller chileno puntualizó que el acceso al mar no estará a discusión.

El acercamiento de Chile con Bolivia —expresado mediante varios gestos— responde a su necesidad de gas boliviano, declaró el diputado de izquierda Gustavo Torrico a una agencia de noticias. Torrico consideró que la desactivación de minas

planeada por Chile en su lado de la frontera común forma parte de una serie de acciones aparentemente amistosas destinadas a obtener el gas boliviano para mitigar su crisis energética.

El gobierno chileno negó que hubiera convenido con Bolivia incluir sus reclamos de acceso al mar en una agenda sin limitaciones, como anunció el subsecretario de relaciones exteriores de Bolivia, Jorge Gummucio. “En ningún momento convinimos en que el tema del reclamo pudiera ser discutido en el encuentro de este lunes y martes en La Paz”, dijo el canciller chileno.

FUENTE: EIU

